



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Rodrigo de Jesús Bran Holguín
DEMANDADA:	Municipio de Vegachí y Porvenir SA
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
RADICADO Y LINK	05001-31-05-016-2017-00946-01 (196) 05001310501620170094601

En la ciudad de Medellín, a los veinte (20) días de junio de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez, y Claudia Angélica Martínez Castillo, quien actúa como ponente, se reunió para resolver los recursos de apelación del demandante y Porvenir SA, contra la decisión adoptada por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín en el proceso ordinario laboral iniciado por el señor **Rodrigo de Jesús Bran Holguín** en contra de **municipio de Vegachí y Porvenir SA**.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

El señor Rodrigo de Jesús Bran Holguín presentó demanda Ordinaria Laboral con la que persigue se declare y obligue al Municipio de Vegachí a emitir y pagar a Porvenir SA el bono pensional causado por el período laborado entre noviembre de 1990 a junio 30 de 1995; y al fondo correspondiente los aportes para pensión entre el 1º de julio de 1995 y el 30 de septiembre de 2004; y una vez Porvenir los reciba le reconozca y pague la pensión mínima de vejez; intereses moratorios y costas.

En sustento de sus pretensiones señaló que el 2 de septiembre de 2015 cumplió 62 años de edad, y que su historia laboral en Porvenir registra 868 semanas a pesar de que laboró para el municipio de Vegachí desde noviembre de 1990 a septiembre de 2004, luego de lo cual siguió cotizando como independiente con lo que hasta la fecha debía tener en realidad 1.230 semanas.

Señaló que la discordancia en su historia laboral obedece a que en ella no están incorporados los períodos no cancelados por el Municipio de Vegachí, a pesar de que el ente territorial le informó que (i) los aportes de los meses de abril de 1999 a septiembre de 2002 los pagó al ISS; (ii) los correspondientes al mes de octubre de 2002 hasta el retiro del servicio en octubre de 2004 fueron cancelados a la AFP Porvenir; (iii) los del tiempo comprendido entre noviembre de 1997 y marzo de 1999 están en trámite de pago a la AFP Porvenir; y (iv) los causados desde su ingreso en noviembre de 1990 hasta octubre de 1997 en un cupón para bono pensional que será expedido a solicitud de la AFP que tramite la pensión.

Posteriormente agregó que al contrastar los pagos efectuados por el Municipio de Vegachí entre noviembre de 1990 a septiembre de 2004 estos solo corresponden a 485.77 semanas cuando debería tener cotizado un total de 718 semanas, incluido el bono pensional.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas se pronunciaron así:

El municipio de Vegachí aceptó los hechos relativos a la identificación del demandante, la totalidad de semanas que registra la historia laboral, el tiempo laborado para el Municipio de Vegachí y monto de los aportes, las peticiones elevadas ante dicho ente y las respuestas allí emitidas, de los demás hechos dijo que no le constan porque se refieren a un tercero, y que no son ciertos los demás aclarando que, contrario a lo afirmado por el actor sí cumplió sus obligaciones frente al sistema general de seguridad social en pensiones. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa por activa respecto al cobro del bono pensional y cumplimiento de obligaciones a cargo del municipio de Vegachí.

Porvenir SA aceptó los hechos referentes a las semanas cotizadas en la historia laboral y el capital recaudado, el período laborado al Municipio de Vegachí, las cotizaciones efectuadas como independiente; pero dijo que no le consta la fecha de nacimiento y edad del actor, ni los hechos relacionados con los pagos que según se dice hizo el Municipio de Vegachí con anterioridad al ciclo 10 de 2002, ni las circunstancias personales del actor, de los demás hechos manifestó que no son ciertos; se opuso a las pretensiones de la demanda; como excepciones previas invocó la de falta de integración del litis consorcio necesario por pasiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de bonos pensionales, y de mérito las de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, petición antes de tiempo, hecho exclusivo de un tercero, buena fe y prescripción.

En el proveído a través del cual el juez de instancia admitió las contestaciones de las demandadas, ordenó la integración del contradictorio con la Nación – Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos – Oficina de Bonos Pensionales (archivo 018 (1) carpeta).

La Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no le constan los hechos de la demanda por no haber sido la entidad empleadora del demandante ni ser una administradora de fondo de pensiones; se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones la de falta de integración del litis consorcio necesario, y falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 8 de octubre de 2020 absolvió de las pretensiones al Municipio de Vegachí y a la Nación- Ministerio de Hacienda lo cual se debió a que encontró probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto de la primera entidad; a Porvenir la condenó a reconocer al demandante la pensión mínima de vejez a partir del 1º de marzo de 2018, en cuantía equivalente a un (1) smlv, con derecho a 13 mesadas anuales, calculó el retroactivo de las mesadas causadas entre el 1º de marzo de 2018 y el 30 de septiembre de 2020, debidamente indexado, en la suma de \$27.259.797, y

autorizó descontar los aportes por salud. Declaró no probadas las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, petición antes de tiempo, hecho exclusivo de un tercero, buena fe, e impuso condena en costas a cargo de Porvenir.

El problema jurídico que se planteó consistió en establecer si el demandante tiene derecho a un bono pensional y de ser así a quién corresponde emitirlo. A partir de ese cuestionamiento analizó las pruebas y comprobó que el demandante trabajó para el municipio de Vegachí, y éste pagó los aportes a pensiones, pero la devolución del bono pensional tipo A, al cual tiene derecho el actor, se debió al incumplimiento en los requisitos formales y a la falta de gestión por parte de Porvenir SA ante el ente territorial y la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda para la redención del bono pensional.

Del análisis de la historia laboral del demandante extrajo que tiene 1.276.99 semanas cotizadas, de ellas 711.28 corresponden al tiempo trabajado en el Municipio de Vegachí entre el 1 de diciembre de 1990 y el 30 de septiembre de 2004, y las 565.71 restantes las cotizó como independiente, por lo que al haber cumplido el demandante los 62 en el año 2015, tiene el derecho a que Porvenir le reconozca la garantía de la pensión mínima de vejez.

Para fijar el momento del disfrute del derecho, ante la inexistencia de prueba de la solicitud, tomó como fecha de referencia el 1 de noviembre de 2017, cuando el actor presentó la demanda, contabilizó los 4 meses que Porvenir tenía para resolver y lo concedió desde el 7 de marzo de 2018.

No condenó por intereses moratorios, por cuanto el actor estaba en el trámite de obtener la pensión mínima, y no era posible determinar la fecha en que Porvenir se constituyó, dispuso el pago indexado de las mesadas pensionales desde la exigibilidad, y las costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN

RECURSO DE LA DEMANDANTE.

Reprocha que el sentenciador de primer grado no concediera los intereses moratorios, debido a que no obraba solicitud de pensión ante Porvenir, y lo encontró contradictorio con la decisión de conceder el disfrute del derecho a partir de la fecha de presentación de la demanda, según dice, el juzgador perdió de vista que la demandante no podía radicar la solicitud de pensión de vejez por cuanto el Porvenir no la recibiría hasta tanto contara con la totalidad de semanas exigidas para acceder a esta prestación, y como el Municipio de Vegachí pagó extemporáneamente los aportes, en agosto de 2017, cuando pidió la asesoría en marzo aun esos aportes no estaban reportados en su historia laboral y el afiliado no puede verse afectado por situaciones ajenas a él, por trámites administrativos. Insistió en que la presentación de la demanda es una reclamación y a partir de esa fecha podía estudiarse el derecho del demandante y reconocerle la prestación sin esperar el fallo.

RECURSO DE PORVENIR SA.

Sustentó su inconformidad con la decisión en que cuando el demandante estuvo en el RPM no se realizaron los aportes al ISS hoy Colpensiones y no estaban habilitados para efectuar su cobro sino el ISS; por lo que no se pueden contabilizar estos tiempos para la garantía de pensión mínima que se reconoció. Que hay falta de reclamación administrativa, por cuanto el actor no efectuó reclamación de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, lo que imposibilitó al fondo realizar el estudio si cumplía o no con la pensión consagrada en el artículo 64 Ley 100/93, sin el cual no es viable aplicar la garantía de pensión mínima del artículo 65 ibidem.

Señaló que el actor no cumple con los requisitos de pensión mínima del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 porque el Municipio de Vegachí, como cuota-partista, no le ha emitido ni pagado el bono pensional; por ende, única y exclusivamente se puede realizar el estudio de la garantía de pensión mínima con las semanas efectivamente cotizadas -868 semanas-, las cuales son insuficientes para arribar a las 1.150 requeridas por la norma. Una vez se pague el bono pensional con los tiempos que omitidos por el Municipio de Vegachí, podría constatar si la actora reúne el capital para obtener la pensión; no obstante, como el ente territorial no ha realizado el pago, la demandante no alcanza el número de semanas requerido

IV. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.

El demandante reiteró los argumentos expuestos en primera instancia, pero agregó que en febrero de 2017 solicitó a Porvenir el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por garantía de pensión mínima, pero se negaron a recibirle los documentos bajo el argumento de no tener la totalidad de semanas cotizadas; sin embargo durante el proceso pudo demostrar el pago de aportes de manera extemporánea por el empleador Municipio de Vegachí, que Porvenir no tuvo en cuenta y negó la prestación cuando el demandante ya tenía los requisitos de ley para acceder a la prestación de vejez, razón por lo que la demanda se radicó en noviembre 1º de 2017, y que de no pagar los intereses moratorios se premia a quienes han ocasionado perjuicios.

Porvenir SA insiste en los argumentos de primera instancia y destaca que existen aportes pensionales que no fueron abonados en su momento por el ISS, así como del correspondiente cuotapartista, lo que ha incidido negativamente en el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez en favor del actor.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

Conoce la Sala del recurso de apelación de la sentencia de conformidad con lo señalado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO.

Esta Sala se ocupará de analizar, si en el caso sometido a estudio, se acreditaron los presupuestos de ley para el reconocimiento y pago de la garantía de pensión mínima de la pensión de vejez en favor del actor, y si hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

5.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

No son hechos discutidos la fecha de nacimiento del demandante, los períodos que laboró para el ente territorial Municipio de Vegachí con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, su vinculación al RPM desde el 1º de septiembre de 1995 y su traslado al RAIS el 30 de agosto de 2002, las semanas reportadas de acuerdo a las cotizaciones al RPM y al RAIS y reconocidas en su historia laboral de 868, su última cotización para el mes de febrero de 2017.

Se procederá al estudio inicialmente del recurso presentado por la demandada PORVENIR S.A.

5.4 REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ EN EL RAIS

Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se creó la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores al régimen pensional de su escogencia, ya sea el régimen de prima media con prestación definida (RPMPD) o el de ahorro individual con solidaridad (RAIS), ello a fin de que el trabajador y afiliado pudiera cotizar para los riesgos pensionales de invalidez, vejez y muerte.

En lo que respecta al RAIS, el afiliado tiene la potestad de solicitar el reconocimiento de la prestación de pensión de vejez a cualquier edad, siempre y cuando el saldo de su cuenta de ahorro individual, incluido el bono pensional, si tuviere derecho al mismo, permita financiar una pensión en los términos consagrados en el artículo 64 de aquella ley. Pero en el caso de que el afiliado cumpla con el requisito de edad mínima, pero no haya alcanzado a generar la pensión mínima consagrada, siempre que tenga cotizadas en su historia laboral un mínimo de 1.150 semanas tendrá derecho a la garantía de pensión mínima de vejez del artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Así, en los casos en que el afiliado haya laborado para el Estado o sus entidades descentralizadas tendrán derecho a la constitución y emisión del bono pensional que contribuyen directamente a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones. La emisión del bono pensional es responsabilidad de la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de ingresar al RAIS, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuos

o discontinuos, haya sido igual o mayor a cinco (5) años, pero cuando el tiempo de cotización o de servicios en la última entidad pagadora de pensiones, sea inferior a cinco (5) años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones, en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicio, en armonía a la normatividad consagrada en los artículos 115 a 120 Ley 100 de 1993.

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 656 de 1994, radica en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones AFP, adelantar por cuenta del afiliado, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos para su redención. En armonía con esta normatividad, el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, contempla la obligación que tienen las AFP de verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, y en el artículo 52 establece el procedimiento a adelantar y los términos aplicables a efectos de la expedición y pago contenida en el art. 115 de la Ley 100 de 1993; el proceso de liquidación provisional del bono, el deber de confirmar o certificar la información del bono que haya sido *-objetada-*.

Lo particular en el presente caso es, por una parte, que la historia laboral del demandante no exhibe la totalidad de semanas cotizadas, y por la otra, la imposibilidad de emisión del bono pensional, con fecha de redención señala 02/09/2015, debido a las inconsistencias originadas por períodos no cotizados por su antiguo empleador Municipio de Vegachí, entre el 01/12/1990 y el 30/06/1995, que arrojan el error 3852: *INCONSISTENCIA; NO EMITIBLE, EXISTE TRASLAPO PARA EL MISMO EMPLEADOR DE CERTIFICACIÓN CETIL O CENISS E HISTORIA MASIVO 3852 ISS/COLPENSIONES CON APORTES A PENSIÓN. LA AFP DEBE SOLICITAR EL CAMBIO DE LA CERTIFICACIÓN CETIL O CENISS* (fl. 12 a 14 archivo 017AnexosContestaciónDemandaPorvenir), que debe ser corregido por Porvenir SA.

Ante controversias suscitadas con la emisión de un bono pensional, ha señalado la jurisprudencia de la CSJ de la Sala de Casación Laboral que es obligación de los fondos de pensiones adelantar las gestiones no solo de cobro sino administrativas en los casos en que haya controversias en la información consolidada en el bono pensional, al respecto la sentencia SL2512-2021 señaló:

[...] si bien la AFP, basa su negativa en inconsistencias que presentaba el bono pensional, debe recordarse que la obligación de la Administradora para la reconstrucción de la historia laboral a efectos de materializar el llamado título de deuda pública, no surgen en el momento en que el afiliado presenta la reclamación pensional, pues la tarea impuesta, debe ser desarrollada desde el momento en que se hace efectiva la afiliación a la administradora respectiva, pues conforme al artículo 20 del Decreto 656 de 1994 se les concede un término de 6 meses siguientes a la vinculación, para elevar la solicitud de emisión, además del seguimiento que, frente al mismo, deben realizar.

(...) A más de la solicitud de emisión, la citada norma también les impone a las administradoras, el seguimiento efectivo al trámite del bono pensional, al punto que lo ordena periódico (trimestral), obligación que en el caso concreto no se advierte cumplida. Recordemos que en el escrito de demanda la accionante evidencia que, desde la negativa de la entidad, 29 de abril de 2014, se le indicó el estado del bono, transcurrieron más de 3 años.

Entonces, se exhibe insoslayable lo descrito en el artículo 4 *ibidem* en cuanto a que «*En su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran **obligadas** a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.*».

Y en este mismo sentido la sentencia SL 2227-2020 de la misma corporación precisó:

Impone recordar, lo que esta Corporación ha orientado frente a este tipo de situaciones, en el sentido que, en primer lugar, para efectos de contabilizar las semanas cotizadas por un afiliado aportante, a fin de verificar si se cumplen los presupuestos legales tendientes a obtener un derecho pensional, se deben tener en cuenta las sufragadas oportunamente, las que se encuentran en mora e, incluso, las que se pagaron de manera extemporánea, dada la falta de gestión de cobro por parte de la administradora a la que aquel se encuentre vinculado."

Colofón de lo antes expuesto encuentra esta sala que los reparos de la demandada Porvenir SA no son de recibo, por cuanto quedó demostrado en el plenario que la semanas que no se encuentra reportadas en la historia laboral de dicho fondo fueron laboradas por el demandante, y si bien los aportes no fueron pagados oportunamente por el empleador Municipio de Vegachí, se allegaron las constancias de su pago, y de acuerdo a las anotaciones del bono pensional y las acciones adelantadas por el demandante con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, ya venía gestionando la solución de tales inconsistencias que solo pueden ser validadas por Porvenir como la AFP de escogencia del actor, pues la administradora de pensiones tenía conocimiento de ellas desde el 20 de agosto de 2010 (folio 15 archivo 17AnexosContestaciónDemandaPorvenir).

Sumado a ello se observa que, de acuerdo a las semanas efectivamente cotizadas que la AFP reconoce al hoy demandante para un total de 868, de sumársele los tiempos que se encuentran probados dentro del sumario que el actor efectuó cotizaciones teniendo como empleador al Municipio de Vegachí con los reportados

como independiente en efecto, tal y como lo calculó el juez de primer grado, superan el mínimo de 1.150 semanas que exige el artículo 65 ibídem.

Así las cosas en el caso bajo estudio se encuentra acreditado que a la fecha el actor cumple con los requisitos de ley de edad y semanas cotizadas, para que le sea reconocida la garantía de pensión mínima de vejez, sin más dilaciones por parte de la AFP PORVENIR S.A., razones suficientes para que se confirme la decisión de reconocimiento y pago en favor de PORVENIR SA de la pensión de vejez al actor en cuantía de 1 smlvm, más su retroactivo pensional, cuando se encuentra acreditado ya había cesado de hacer cotizaciones al sistema encontrándose desvinculado para la fecha de causación -1 marzo de 2018-.

5.5 INTERESES MORATORIOS

Confirmada la decisión de reconocimiento a la prestación económica de vejez a favor del demandante, la Sala se ocupará de su recurso correspondiéndole dilucidar si hay lugar a que se reconozcan los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La SCL de la CSJ en sentencia SL4320-2022 se refirió a la línea jurisprudencial sentada de antaño respecto la procedencia del reconocimiento de intereses moratorios de la norma en cita así:

Desde el pódico se hace necesario recordar que, el criterio de la Sala frente a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es que estos proceden siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales; conforme a lo expuesto en la sentencia CSJ SL3130-2020, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, en tanto su imposición es simplemente el resarcimiento ante los efectos adversos para el acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, en la providencia CSJ SL5627-2019, se explicó:

"Ciertamente es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)".

De lo anterior ha de concluirse que el fallador no aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque es esta la norma que regula el asunto en caso de mora en el otorgamiento de la pensión dentro de los términos legales, esto es, los 2 meses siguientes a la reclamación con la aportación de las debidas probanzas, como lo establece la Ley 717 de 2001, entratándose de pensiones de sobrevivientes, hecho acreditado en el proceso porque lo cierto es que a la demandante solo hasta el 16 de noviembre de 2007 se le hizo la devolución de los saldos existentes en la cuenta individual de su cónyuge, pese a que

había solicitado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el 25 de junio de 2007.”

Durante el proceso se demostró que el demandante tenía consolidado el derecho a la garantía de pensión mínima, y que la negativa de Porvenir SA a conceder la prestación se debió a la desidia de esa entidad al no actualizar las inconsistencias e incluir en la historia laboral del afiliado las semanas trabajadas con el Municipio de Vegachí, pero cotizadas extemporáneamente, lo que no traduce nada distinto a que el demandante tenía consolidado su derecho a la pensión de vejez con antelación a la presentación de la demanda pero no lo había podido materializar por las razones antes expuestas.

En efecto, previa la presentación de la demanda, el actor elevó diversas peticiones, por ejemplo en 2017 le pidió al Municipio de Vegachí esclarecer las fechas de pago de los aportes en mora y la emisión de su bono pensional, y en la comunicación de abril 24 de ese mismo año le informó:

[...] los aportes obligatorios comprendidos entre los periodos 11 de 1997 y 03 de 1999, se encuentran en trámite de pago a la AFP Porvenir y los causados desde la fecha de ingreso hasta el período 10 de 1997 corresponde a un cupón de bono pensional, el cual solo se expedirá a solicitud de la AFP que tramite la pensión del señor Bran Holguín, dado que el afiliado ni el apoderado se encuentran legitimados para gestionar el reconocimiento y pago del mismo.

Pese a ello, la administradora de pensiones Porvenir no realizó las gestiones administrativas para lograr la redención del bono pensional y mucho menos corrigió las inconsistencias en la historia laboral del actor derivadas del pago extemporáneo de las cotizaciones del empleador municipio de Vegachí, a pesar de que este le certificó el pago, y solo lo hizo durante el transcurso del proceso; con ese actuar, retrasó el reconocimiento de la prestación puesto que, una vez llega a la edad, la consolidación del total de las cotizaciones del afiliado en su historia laboral es crucial para iniciar el reclamo de la pensión, de tal manera que esta entidad incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales, al no haberse encargado oportunamente de coordinar todos los trámites para la liquidación, emisión, expedición, redención y pago del bono pensional de su afiliado.

La demandada Porvenir aduce en su favor que el demandante no elevó petición de reconocimiento pensional anterior a la presentación de la demanda y que esa circunstancia impide declarar que la administradora incurrió en mora; sin embargo, ese argumento no es de recibo por cuanto la potestad para realizar los trámites previos al diligenciamiento del formato de solicitud pensional relacionados con el bono pensional está atribuida a la administradora y al ser entrabadas por ella misma, no puede aprovecharse de su propia omisión, la cual puso al demandante en la necesidad de dirigir a esta entidad diferentes reclamaciones con el fin de corregir su historia laboral.

En este caso, se encuentra la documental de Bono Pensional emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de PORVENIR AFP en fecha 18/12/2018, donde informa que no puede emitir el bono debido a las inconsistencias encontradas en la información del afiliado, documental obrante a folios 5 a 8 del archivo 023 AnexosContestacionDemanda, y que a continuación se enlistan:

3628	OBSERVACIÓN: EL BENEFICIARIO NO TIENE HISTORIA LABORAL VÁLIDA PARA BONO. SOLUCIÓN: LA AFP DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE HISTORIA LABORAL VÁLIDA PARA BONO PENSIONAL Y REPORTARLA AL ISS/COLPENSIONES SI ES EL CASO O INCLUIR LA CERTIFICACIÓN DE HISTORIA LABORAL CON OTROS EMPLEADORES DIFERENTES AL ISS/COLPENSIONES EN LA SOLICITUD.
3776	OBSERVACIÓN: LA NOVEDAD LABORAL QUE SOPORTA EL SALARIO ES INVALIDA. SOLUCIÓN: LA AFP DEBE VERIFICAR EL MENSAJE QUE PRESENTA LA VINCULACIÓN QUE SOPORTA EL SALARIO
3830	OBSERVACIÓN: NOVEDAD DE HISTORIA LABORAL ISS/COLPENSIONES O NO ISS/COLPENSIONES POSTERIOR A LA FECHA DE CORTE NO SE TIENE EN CUENTA PARA BONO PENSIONAL .
3835	INCONSISTENCIA: EL ARCHIVO LABORAL MASIVO DEL ISS/COLPENSIONES REPORTA COMO DIAS TRABAJADOS 0 PARA HISTORIA LABORAL POST94. SOLUCIÓN: SI LA NOVEDAD NO ES CIERTA LA AFP DEBE REPORTAR LA INCONSISTENCIA A COLPENSIONES PARA SU RESPECTIVA CORRECCION.
3852	INCONSISTENCIA: NO EMITIBLE, EXISTE TRASLAPO PARA EL MISMO EMPLEADOR DE CERTIFICACION CETIL O CENISS E HISTORIA MASIVO ISS/COLPENSIONES CON APORTES A PENSION. LA AFP DEBE SOLICITAR EL CAMBIO DE LA CERTIFICACION CETIL O CENISS
3911	OBSERVACION: AFILIACION INVALIDA. SE PRESENTA CUANDO UNA ENTIDAD PARA LA CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA EL RÉGIMEN, NO AFILIA AL EMPLEADO AL RAI O AL ISS/COLPENSIONES POR LO TANTO NO ES VALIDO PARA BONO PENSIONAL.

Es decir, que dentro del curso de este proceso la AFP Porvenir fue informada de las inconsistencias encontradas por la Oficina de Bono Pensional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para le emisión del Bono Pensional del hoy demandante, como se infiere de la documental antes relacionada, donde especifican cada una de los errores a corregir o certificar por la AFP, sin que haya allegado prueba alguna consistente en señalar que haya cumplido con su deber de legar de desplegar las acciones administrativas con la información del afiliado para corregir tales errores.

La línea jurisprudencial trazada en cuanto a la naturaleza de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sido reiterativa

en decir que hay lugar a su imposición a partir del momento en que vence el plazo legal para que la entidad de seguridad social otorgue el derecho pensional cuando se está frente a una sola petición de reconocimiento de la prestación, como en las sentencias SCL43564-2011, SL531-2021, SL1019-2021.

Cuando estamos ante derechos de raigambre constitucional como lo es la seguridad social, su fin en sí mismo no es otro sino salvaguardar derechos e intereses de los individuos y las familias, y garantizarles que su calidad de vida no sufra menoscabo ante cualquier contingencia social; el cual se estructura sobre los principios de eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación; ello sumado a que la seguridad social es un servicio público obligatorio por parte del estado que puede y debe ser prestado por entidades públicas o instituciones privadas, como en este caso Porvenir SA, y que cuando se trate de actividades directamente vinculadas al reconocimiento y pago de las pensiones, se torna en esencial.

En consecuencia, considera esta Sala que la actuación omisiva por parte de Porvenir SA como AFP en ejercicio del derecho de selección de régimen pensional del demandante, se ha tornado nugatoria para que éste obtenga el derecho a la pensión que hoy reclama en sede judicial; y para dar respuesta al problema jurídico planteado en este caso particular, se contrae a determinar si en el caso en concreto hay lugar a la imposición de intereses moratorios, en razón de su naturaleza resarcitoria y no indemnizatoria como lo ha sostenido la CSJ en SCL y quien ha señalado además que tiene fundamento en que es la pensión el ingreso periódico con que cuentan las personas de la tercera edad, para sortear sus necesidades básicas con la sentencia SL3662-2020 de la siguiente manera:

Por ello, esta corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento, en este caso los intereses moratorios, encuentran un importante fundamento en el hecho de que la «[...] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que «Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial [...]» (CSJ SL1681-2020).

En paralelo a lo anterior, esta corporación ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios (CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras), de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación.

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.”

Por lo que una vez analizada la realidad social que rodea este caso y ante los hechos que imposibilitaron que el demandante desde el 2018 pudiera acceder a la pensión de vejez, debido a que la AFP Porvenir, quien tiene la administración de los aportes del actor, era esta entidad quien debía propender por la custodia de la historia laboral del demandante y garantizar a través de los mecanismos que la misma ley le otorga, la actualización oportuna de los datos de sus afiliados, al no hacerlo le ocasionó un perjuicio cuyo resarcimiento constituye el sentido de los intereses moratorios regulados por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, la Sala amparándose en los principios de progresividad, definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como una carga estatal de orden constitucional e internacional, en virtud de la cual el Estado debe propender por realizar reformas que permitan cada vez mayor inclusión y ampliación en los niveles de cobertura y calidad de la seguridad social en el país, por lo cual, dicho principio no puede generar situaciones regresivas para los derechos y beneficios adquiridos en materia de seguridad social (T826-2014), y en el principio *–pro homine–* el juez como director del proceso y amparado en el bloque de constitucionalidad debe preferir la interpretación más garantista para los afectados, impondrá a la administradora el pago de los intereses moratorios por el retraso que su actuar ocasionó en el reconocimiento de la pensión del actor.

Así, dadas las circunstancias particulares que rodean este caso, para determinar el momento a partir del cual Porvenir SA incurrió en mora de pronunciarse sobre la prestación de vejez, por exceder el término de cuatro (4) meses previsto en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 dentro del cual las administradoras deberán decidir las peticiones de pensiones, se tomará como punto de partida la notificación personal del auto admisorio de la demanda ocurrido el 11 de septiembre de 2018 (archivo 015ActaNotificaciónPersonalPorvenir), porque desde allí la entidad tuvo conocimiento del inicio de la acción, del propósito que con ella se persigue, por lo que, una vez verificó que el demandante reunía los requisitos para acceder a su derecho pensional debió proceder al reconocimiento directo, sin necesidad de

esperar o atenerse a las resultas de este proceso judicial, en el que igualmente se llegó a la conclusión de que el demandante cumplía con los requisitos de ley para adquirir la calidad de pensionado por vejez.

De ese modo, los intereses proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación, en consecuencia, se revoca la decisión objeto de alzada parcialmente, a fin de ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde los cuatro meses posteriores a la notificación de Porvenir SA de la demanda, es decir, a partir del 11 de enero de 2019, los que deberán liquidarse hasta la fecha de su pago efectivo. Confirmando la decisión objeto de alzada en lo demás.

Se condenará en costas procesales de segunda instancia a cargo de la demandada Porvenir SA y en favor del demandante, como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000 pesos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: Revocar el numeral séptimo de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 8 de octubre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor RODRIGO DE JESÚS BRAN HOLGUÍN en contra de MUNICIPIO DE VEGACHÍ Y PORVENIR SA, para en su lugar ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde los cuatro meses posteriores a la notificación de Porvenir SA de la demanda, es decir, a partir del 11 de enero de 2019, los que deberán liquidarse hasta la fecha de su pago efectivo.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia objeto de alzada en lo demás.

Rdo. 05-001-31-05-016-2017-00946-01
Rad. interno 2022-196
Dte. Rodrigo de Jesús Bran Holguín
Dda. Municipio de Vegachí y Porvenir SA

TERCERO: Costas procesales de Segunda Instancia a cargo de la demandada Porvenir SA y en favor del demandante, como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000 pesos.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ